



Observatorio forestal 2005

Este organismo, de marcado carácter ecologista, opina que 2005 ha sido un año dramático en los montes y bosques españoles: 17 personas muertas, unas 155.000 hectáreas arrasadas. «Este año nos ha dejado una sensación de fracaso» dijo Joaquín Nieto, del Departamento de Medio Ambiente de CC.OO., en su conferencia sobre los incendios forestales. Las políticas contra los incendios son más activas y más decididas cada año, y sin embargo el número de fuegos y la superficie quemada siguen creciendo. Los datos de CC.OO. indican que la península Ibérica arde mucho más que el resto del área mediterránea y, con unos 20.000 incendios al año, aporta nada menos que la mitad de los fuegos forestales de toda Europa. Para CC.OO., esta calamidad se nutre de tres ingredientes esenciales: la peligrosa composición de la masa forestal y su mala gestión, la elevada intencionalidad en los incendios y el fracaso en su investigación y castigo y el ineficaz sistema de prevención y extinción. En cuanto a la configuración de los bosques españoles, Joaquín Nieto destacó, como problema estructural principal, la concentración de especies «amantes» del fuego, como el pino y el

eucalipto, en grandes extensiones sin apenas discontinuidad; esos monocultivos resultantes de las campañas de reforestación de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. «Si hay 20.000 hectáreas sólo de pino y se declara un incendio, arden todas» comentó. La solución pasaría por fragmentar esos bosques con «mosaicos de diversidad», construyendo a medio y largo plazo ecosistemas forestales más variados y por tanto más resistentes al fuego. Sobre las causas de los incendios forestales, las cifras son de escándalo: el 95% se deben a la actividad humana; se ignoran las causas inmediatas en casi el 20% de los siniestros (77% en Madrid); el 53% son intencionados (en Galicia, el 81%), lo que significa unos 11.000 fuegos provocados. Y solamente en el 1% de los casos se practica alguna detención, que no termina necesariamente en procesamiento ni mucho menos en condena. «Hay años en que no prospera ni un solo proceso y no hay una sola condena; es decir, 11.000 delitos impunes al año». CC.OO. valora positivamente la prohibición de recalificar durante 30 años los terrenos quemados, una de las medidas más llamativas de la reciente reforma de la Ley de Montes. Y es que en el 10% de los incendios provocados se busca, precisamente, la recalificación. También aplaude el sindicato la mayor implicación que, al parecer, tendrá en adelante la Fiscalía General del

Estado y la creación de fiscalías especializadas en las Comunidades Autónomas. Mas le parece, todavía, insuficiente. CC.OO. propone que los 5.000 agentes forestales que hay en España puedan ejercer de policía judicial –junto al SEPRONA de la Guardia Civil– en la investigación y la denuncia de los incendios. Lo planteó ante la reforma de la Ley de Montes. La ministra de Medio Ambiente estaba de acuerdo –asegura CC.OO.–; pero el Ministerio de Interior se negó en redondo. El operativo contra incendios también debe mejorar mucho, según Joaquín Nieto. Todavía la extinción copa las dos terceras partes de los recursos, «cuando es sabido que los incendios del verano se ‘apagan’ en invierno». Entre muchas otras ideas, el informe de CC.OO. *Incendios forestales 2005. Prevención y extinción. Medios y recursos disponibles* sugiere «la recuperación de las actividades de aprovechamiento de los montes a través de una gestión sostenible de los mismos» y «la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo sostenible que a su vez contribuirían a una mejor conservación de los bosques, a través de la utilización energética o para compostaje de la biomasa forestal residual, la certificación de los productos forestales, etc.». Joaquín Nieto esbozó parte de lo que pensaba desgranar el responsable del Programa Forestal de



WWF/Adena, Félix Romero, en su conferencia *Qué tiene que cambiar en la política forestal*. Tenemos –expuso Romero– casi cuatro millones de hectáreas reforestadas entre los años 30 y 70 del siglo XX sin apenas diversidad y prácticamente abandonadas a su suerte, sin realizar entresacas, sin introducción de nuevas especies... sin seguimiento. Tenemos ecosistemas de alto valor muy fragmentados, por la urbanización, por los pantanos, las carreteras, las líneas férreas, las estaciones de esquí... y, consecuentemente, «lince atropellados, osos aislados, urogallos machacados por las pistas forestales...». La política forestal española resulta, por tanto, casi inexistente, según ADENA; una política que debería conjugar el aprovechamiento económico de los bosques y el de sus valores medioambientales y sociales. Félix Romero reveló que responsables actuales y recientes del Ministerio de Medio Ambiente en cuestiones forestales –o sea, gente del PSOE y del PP– le confesaron que los políticos



no invierten en lo forestal porque la sociedad no lo reclama. El bosque no da votos. De momento. «No quieren entender que el sector forestal y la gestión del medio ambiente son cuestiones estratégicas, fundamentales para el propio futuro del país», apostilló Félix Romero. «Es inconcebible, por ejemplo, que aún no haya forma de invertir fiscalmente parte de lo que los madrileños pagamos por el agua de la sierra de Guadarrama en la gestión sostenible de esos montes», dijo, reclamando a las instituciones instrumentos de este tipo e incentivos económicos y fiscales que animen a los propietarios forestales a gestionar los bosques adecuadamente, más teniendo en cuenta que cerca del 70% de los bosques españoles es propiedad privada. Concluyó el representante de WWF/Adena llamando a la sociedad a consumir responsablemente y a las administraciones a adquirir bienes forestales producidos con criterios de sostenibilidad. ADENA lleva años pidiendo a los gobiernos locales que apliquen

políticas de «compra verde» de madera y papel. Sin demasiado éxito. El 99,7% de los ayuntamientos españoles compra madera sin certificar, según la campaña de Adena *Ciudades por los Bosques*. De ahí que esta organización ecologista no dude en felicitar a las instituciones que rompen la norma, como por ejemplo la Junta de Andalucía, que obtuvo recientemente la certificación forestal FSC para 12.000 hectáreas de alcornoques en Cádiz y Sevilla.


Félix Romero dejó el campo abonado para la charla de Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de Greenpeace. Soto se centró en la madera ilegal, «un problema pendiente de solución» que incluso parece empezar a preocupar al mismísimo Banco Mundial. La madera ilegal es la que se tala sin los mínimos criterios de respeto al medio ambiente, vulnerando los derechos de poblaciones indígenas, violando las leyes locales e internacionales, la que procede de países en guerra o con enfrentamientos intestinos y revierte en compra de armas, la que se vende con documentación falsa, la que se transporta de forma semiclandestina... La que consumimos aquí en buena medida.

Greenpeace calcula que el 35% de la madera que importa España es ilegal, con un 0,8% procedente de países en conflicto, como Liberia, Sierra Leona, Congo, Colombia... Y no sólo madera tropical; también de

los bosques boreales de Rusia, por ejemplo, zonas donde el Estado prácticamente no existe y son las compañías petrolíferas y madereras quienes imponen la ley, su ley. «Esta es la huella ecológica del mercado español de la madera», remarcó Miguel Ángel Soto. «Y eso sin contar los productos manufacturados de madera made in China, procedentes de talas ilegales en Siberia oriental, Malaisia, Nueva Guinea...». La Organización Internacional de Madera Tropical se propuso que para el año 2000 todos los países que la integran tendrían planes de gestión forestal sostenible que terminaran de una vez con la producción y el consumo de madera ilegal. Obviamente, no lo ha conseguido. Incluso en algunos países la situación ha empeorado.

Al mismo tiempo, se atisban algunos pasos atinados, en opinión de Greenpeace, como el hecho de que, gracias a la presión constante del movimiento ecologista, las instituciones de la Unión Europea hayan elaborado un plan de acción para el cumplimiento de las leyes y que ciertos países comunitarios estén firmando acuerdos bilaterales con países productores para establecer sistemas de seguimiento de la madera, desde la plantación a la venta. España, por ejemplo, con Bolivia y México.

Pero se necesita mucho más, dice Greenpeace. Se necesita una legislación específica y taxativa. Miguel Ángel Soto finalizó su

intervención arengando al público, a la sociedad, a las administraciones a consumir exclusivamente madera certificada y desvelando algún que otro hecho esperanzador, como que la República Democrática del Congo haya establecido una moratoria sobre nuevas concesiones de talas mientras se definen nuevos criterios para el futuro. Finalmente intervinieron representantes de la Asociación para la Defensa del Bosque Autóctono apenas pudieron hacer un breve repaso de la historia de ARBA, que ha cumplido 20 años. Emilio Blanco, uno de sus fundadores, recordó que ARBA nació del deseo de una serie de amigos amantes de los árboles de pasar de las palabras a la acción: «*Ir al campo y plantar árboles, editar libros sobre árboles, educar a los chavales, organizar cursos y jornadas...*». ARBA cree que en estos dos decenios que la contemplan ha habido algunos cambios a mejor. «*Hoy no pasan algunas cosas que pasaban hace veinte años; a la gente parece que le preocupa un poco más el medio ambiente, hay una mentalidad más abierta en cuanto a defender el bosque autóctono...*» señaló Emilio Blanco. «*Hoy no resulta tan sorprendente que se hagan jornadas sobre la propagación de especies autóctonas, sobre restauración del paisaje...*» 

MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA — COMUNICACIÓN
 JOSÉ LUIS SEGURA
 944 338 105
 PRENSA@MADERASNOBLES.NET
 www.maderasnobles.net